

LA TRAMPA DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN TIERRAS AGRÍCOLAS



Una reunión de alto nivel entre el gobierno y los representantes corporativos, organizada por la embajada holandesa en Riad, describe la adhesión a las normas “responsables” de inversión en tierras agrícolas como un proceso de “coacción” a las cadenas de suministro. (Foto: [Embajada de los Países Bajos, Reino de Arabia Saudita](#))

En todas partes, de los salones de los directorios de las corporaciones a las salas de reunión de Naciones Unidas, están surgiendo reglas acerca de cómo invertir “responsablemente” en tierras agrícolas.

¿Pero realmente ayudan estas reglas a las comunidades cuyas tierras son el blanco de la inversión o simplemente respaldan a los inversionistas y a los gobiernos que actúan como sus cómplices? ¿Dónde deberíamos nosotros centrar nuestros esfuerzos —como parte de movimientos sociales que apoyan a las comunidades? ¿Tiene algún sentido combatir el acaparamiento de tierras mediante la adopción de reglas sobre cómo invertir de manera más responsable? En este documento de discusión, GRAIN busca estimular la reflexión y el debate en torno a estas importantes preguntas.

En 2012, GRAIN publicó un informe donde decíamos que la “regulación” es un enfoque equivocado para detener el flagelo del acaparamiento de tierras.¹ Por regulación nos referimos a esfuerzos por imponer restricciones, normas, reglas o estándares que hagan las adquisiciones de tierras menos dañinas para las personas y el ambiente. Demostramos que el desarrollo de “estándares” está lejos de lograr que las adquisiciones de tierras beneficien a todos y simplemente genera toda una nueva industria de la acreditación que se utiliza para calificarlas como “responsables” y así evitarles la etiqueta de “acaparamiento de tierra”. Dijimos que en el mejor de los casos estas iniciativas se basaban en un análisis superficial y que principalmente buscaban garantizar la aceptación social de la expansión de un modelo agrícola que beneficia sólo a unas pocas élites.

¿Qué ocurrió desde 2012? Más de lo mismo. Quienes más presionan para que haya normas, directrices, protocolos y regulaciones relacionadas con el acaparamiento de tierras parecen ser las corporaciones mismas. Éstas necesitan tales marcos de referencia para continuar con

sus negocios y con la obtención de ganancias sin que demasiada gente proteste. Y los gobiernos y las agencias intergubernamentales les han seguido la corriente: en los últimos años han producido una inmensa variedad de nuevas directrices y principios para regular el acaparamiento de tierra. Un amplio rango de organizaciones de la sociedad civil también se han visto envueltas en ejercer presión para que se redacten normas sobre el acaparamiento de tierra, ya sea elaborando principios ellas mismas, ayudando a gestionar acuerdos que respeten ciertos estándares, o intentando utilizar algunos de estos textos, o el espacio político en torno a ellos, como herramientas para que las comunidades rurales exijan sus derechos.

De acuerdo a nuestra experiencia, la llamada inversión responsable en tierras agrícolas es una mala noticia. A primera vista puede parecer buena idea. ¿Quién podría oponerse a un código de ética que orientase las inversiones del agronegocio? Pero políticamente y en la práctica, la inversión “responsable” rara vez funciona en favor de las comunidades locales. Más bien crea una ilusión de responsabilidad que responde a las necesidades de los inversionistas, las agencias donantes y élites políticamente influyentes, no a lo que necesitan las comunidades. En concreto lo que testimoniamos en el terreno donde ocurren los acontecimientos es que casi todos los llamados esquemas de inversión responsable no son sino mecanismos de relaciones públicas.

1. GRAIN, “¿Inversión responsable en tierras agrícolas? Los actuales esfuerzos para regular el acaparamiento de tierras agravarán las situación”, agosto 2012, <https://www.grain.org/article/entries/4567-inversion-responsable-en-tierras-agricolas-los-actuales-esfuerzos-para-regular-el-acaparamiento-de-tierras-agravararan-las-situacion>

Cuán grande es la inversión socialmente responsable. Tan grande como la economía de China

Ya sea que se le llame inversión “ética”, inversión “responsable”, inversión “de impacto” o inversiones “guiadas por criterios ambientales, sociales y de gobernanza”, el cumplir con ciertos estándares para hacer negocios comenzó siendo una moda y se volvió el enfoque dominante. En Estados Unidos, a fines de 2014 la “inversión socialmente responsable” llegó a 6.6 billones de dólares, o un 18% del conjunto de inversiones administradas profesionalmente, que es de 36 billones de dólares.¹ Eso refleja un crecimiento de 76% entre 2012 y 2014. En Europa, la inversión socialmente responsable equivale al 11% de toda la inversión administrada por profesionales (que es de 18.2 billones de euros), es decir 2 billones de euros.² Eso refleja una tasa de crecimiento en relación al 2011 del 23% para las inversiones en sustentabilidad, 92% en las inversiones con exclusiones (es decir, que no invierten en energía nuclear o transgénicos), y un crecimiento del 132% en inversiones de impacto (inversiones que generan efectos sociales positivos además de ganancias financieras). En Australia y Nueva Zelanda, las inversiones socialmente responsables equivalen a 630 mil millones de dólares australianos, o un asombroso 50% de todas las inversiones administradas por profesionales.³ Sumando solamente estos tres mercados, la inversión que las mismas empresas definen como “socialmente responsable” llega a cerca de 10 billones de dólares. Ése es el Producto Interno Bruto de China.

1. The Forum for Sustainable and Responsible Investment, “Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014” (“Informe sobre Tendencias de Inversión Sustentable, Responsable y de Impacto en Estados Unidos”), http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF_Trends_14.F.ES.pdf.

2. Eurosif, “European SRI study 2014,” (“Estudio europeo sobre inversión socialmente responsable, 2014”), <http://www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014/>

3. Responsible Investment Association Australasia, “Responsible investment on the rise again to 50% of the investment industry” (“Inversión responsable crece nuevamente y llega al 50% de las inversiones”), 11 de agosto de 2015, <http://responsibleinvestment.org/wp-content/uploads/2015/08/RIAA-RI-On-The-Rise-Again-To-50-Of-The-Investment-Industry-FINAL-MR.pdf>

La regulación de los acaparamientos de tierra: las corporaciones toman la delantera

Debido al creciente escrutinio público, las corporaciones se ven cada vez más presionadas a hacer algo para no ser calificadas de acaparadoras de tierra, o para que no se les vincule a la deforestación y a otros impactos sociales y ambientales negativos de las inversiones en materia agraria. Para evitar el boicot de los consumidores o medidas legales que pudiesen restringir sus actividades, se están apresurando a generar sus propias normas internas o a adoptar normas externas, para poder ponerle el sello de “inversión responsable” a sus plantaciones, fondos de tierra agrícola, sus participaciones accionarias o sus cadenas de abastecimiento. (ver el recuadro “Cuán grande es la inversión socialmente responsable”). Por ejemplo:

- El número de adherentes a las reglas sobre tierras agrícolas contenidas en los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas se duplicó entre

2011 y 2014, y tales reglas se han incorporado a las directrices generales de Naciones Unidas para los inversionistas.²

- La People’s Company, un empresa de Estados Unidos que facilita grandes inversiones en tierras, ha desarrollado una guía detallada sobre inversión responsable en tierras agrícolas.³
- Credit Suisse y otras compañías financieras han publicado indicaciones para las inversiones responsables relacionadas con agronegocios para empresas de capital privado que estén activas en

2. PRI commodities work stream, <http://www.unpri.org/areas-of-work/implementation-support/commodities/>

3. Peoples Company, “White paper on socially responsible farmland investing shows benefits of new practices,” (“Una guía sobre inversión socialmente responsable en tierras agrícolas demuestra los beneficios de las nuevas prácticas”) 4 de mayo de 2015, <http://peoplescompany.com/blog/2015/white-paper-on-socially-responsible-farmland-investing-shows-benefits-of-new-practices>.



El número de adherentes a las reglas sobre tierras agrícolas contenidas en los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas se duplicó entre 2011 y 2014, y tales reglas se han incorporado a las directrices generales de Naciones Unidas para los inversionistas.

economías emergentes, y en estas indicaciones ponen el énfasis en la adquisición de tierras agrícolas.⁴

- Algunas corporaciones como Illovo Sugar y Nestlé están publicando sus propios códigos de conducta internos sobre inversiones en tierras agrícolas.⁵

4. Ver Credit Suisse et al, "Private equity and emerging markets agribusiness: Building value through sustainability" ("Empresas de inversión privada y agronegocios en mercados emergentes: construcción de valor mediante la sustentabilidad") 13 de mayo de 2015, <http://asria.org/publications/private-equity-and-emerging-markets-agribusiness-building-value-through-sustainability/>.

5. Ver el documento de Illovo en <http://www.illovosugar.co.za/Group-Governance/Group-Guidelines-on-Land-and-Land-Rights>. Acerca del documento de Nestlé, ver Chris Arsenault, "Large food firms back voluntary plan to stop land grabbing," ("Grandes empresas alimentarias respaldan plan voluntario para detener el acaparamiento de tierras.") Reuters, 17 de agosto de 2015. <http://mobile.reuters.com/article/idUSL5N10S2Z620150817>.

¿Qué ha significado en la práctica toda estas prácticas sobre inversiones responsables en tierras de cultivo? Stefania Bracco de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trató de cuantificarlo.⁶ Tomó la base de datos de *Land Matrix* sobre adquisiciones de tierra a gran escala y evaluó en cuántos casos se respetaba alguno de los estándares que se presentan como "inversión responsable."⁷ Los

6. Stefania Bracco, "Large-scale land acquisitions in Africa: Exploring players, roles and responsibilities" ("Adquisiciones de tierra a gran escala en África: actores, papeles y responsabilidades"), Manuscrito sin publicar, 2015 (copia en archivo de GRAIN).

7. Land Matrix es una base de datos sobre adquisiciones de tierra a gran escala mantenida por un grupo principalmente de organizaciones académicas: <http://www.landmatrix.org/>. Fue montada y es mantenida por la International Land Coalition (ILC), una alianza de gobiernos, agencias multilaterales y grupos de la sociedad civil que trabajan juntos en asuntos relacionados con la tierra. La Land Matrix ha sido criticada por muchos grupos por no entregar información correcta acerca de contratos sobre tierras y la ILC es vista



Las acciones de las corporaciones para reducir el “riesgo a su reputación” rara vez significan que las comunidades mantengan el control de sus tierras.

resultados no invitan al optimismo. Sólo una cuarta parte de los acuerdos sobre tierras se hicieron con empresas que participaban en algún sistema de certificación (es decir, con validación por terceras partes) de inversiones socialmente responsables. En el caso específico de agrocombustibles, un tercio de los proyectos no tenía conexión alguna con la responsabilidad social; para otro 20% de los proyectos no había información relacionada con su carácter de inversión socialmente responsable. De forma similar, un estudio reciente de la UNCTAD y el Banco Mundial sobre inversiones agrícolas a gran escala analizó 39 proyectos ya establecidos en África y Asia y encontró que menos de un tercio (30%) estaban afiliados con algún sistema de certificación de inversiones socialmente responsables.⁸ Esto

significa que, en la mayoría de los casos, o se dice que los contratos sobre tierras siguen ciertos estándares de responsabilidad social empresarial pero nadie controla si es cierto, o sencillamente no se aplica ningún sistema de responsabilidad social para ellos.

Mientras tanto, algunas de las grandes ONGs internacionales han adoptado otro enfoque, intentando que grandes transnacionales de la alimentación —como Unilever, Coca Cola, Pepsi y Nestlé— adopten ciertos estándares para luego otorgarles reconocimiento público por ello. En una reunión de alto nivel entre gobiernos y corporaciones, esto fue descrito como un proceso en que las compañías “presionan” a quienes los abastecen de materias primas para que respeten las directrices de conducta empresarial responsable.⁹

como políticamente cercana al poder. Ver: Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria (facilitador), “Critical reflections to strengthen international organizing processes of social movements struggling for the control over land and natural resources” (“Reflexiones críticas para fortalecer el proceso internacional de organización de los movimientos sociales que luchan por el control sobre la tierra y los recursos naturales.”), documentos de trabajo, abril de 2015, documento no publicado (copia en archivo de GRAIN).
8. Banco Mundial, “The practice of responsible investment principles in larger-scale agricultural investments: Implications for corporate performance and impact on local communities” (“La práctica de los principios de inversión responsable en las inversiones agrícolas a

gran escala: implicaciones para el desempeño corporativo e impacto sobre las comunidades locales”), 2014, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wb_unctad_2014_en.pdf.

9. Embajada de Holanda en Riyadh, “Roundtable on international Responsible Agricultural Investment: proposal for a trilateral approach” (“Mesa redonda sobre inversión agrícola responsable internacional: propuesta de un enfoque trilateral”), Informe de una reunión de alto nivel, 20 de enero de 2015, Residencia del Embajador de Holanda, Barrio Diplomático, Riyadh, <http://www.agroberichtenbuitenland.nl/golfstaten/wp-content/uploads/sites/26/2015/03/imgcq683tsm.pdf>.



Una de las ONGs que ha sido miembro de la Mesa Redonda por largo tiempo admite que “es generalizado el incumplimiento de los estándares sobre consentimiento libre, previo e informado”.

Aunque siempre es bueno que las corporaciones eliminen sus malas prácticas, los propios estudios de la industria revelan que la principal motivación para que las empresas se adhieran a estándares de inversión de tierras es el hecho de que sus reputaciones estén en riesgo.¹⁰ En otras palabras, su objetivo es evitar el estigma de acaparadores de tierra. Es cierto que desde 2008, en algunos casos la presión pública ha logrado que las empresas se retiren de algunos proyectos y contratos de adquisición de tierras. La evidencia a nivel local, sin embargo, deja claro que las acciones de las corporaciones para reducir el “riesgo a su reputación” rara vez significan que las comunidades mantengan el control de sus tierras.

Los gobiernos ofrecen más directrices

Los gobiernos, principalmente los de los países industrializados, también han redoblado sus esfuerzos para

10. Bernd Schanzenbaecher y James Allen, “Responsible investments in agriculture, in practice: Results and conclusions from a case study review” (“Inversiones responsables en agricultura: resultados y conclusiones de una revisión de estudios de caso.”), EBG Capital AG, 2015g <http://aldenimpact.com/wp-content/uploads/2015/03/RESPONSIBLE-INVESTMENTS-IN-AGRICULTURE-IN-PRACTICE.pdf>.

facilitar las inversiones responsables en tierras agrícolas. Lo han hecho principalmente tratando de convertir en legislación nacional las llamadas “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (o Directrices Voluntarias). La Unión Europea está presionando para que se adopten las Directrices Voluntarias en África, mediante al menos dos programas distintos que abarcan 21 países.¹¹ Además, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, del G8 —un conjunto de proyectos de agronegocios impulsados por los donantes en África, muchos de los cuales incluyen grandes adquisiciones de tierras—, adoptó sus propias guías internas para establecer acuerdos agrarios responsables, e invitó a las corporaciones que participan en la Nueva Alianza a ponerlos en práctica. Algunos gobiernos, como los de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, también han desarrollado estándares y directrices que “sus” corporaciones y agencias de cooperación al desarrollo debieran cumplir, aunque rara vez lo hacen. Finalmente la Unión

11. Ver documento de AFSA y GRAIN, “Land and seed laws under attack: Who is pushing changes in Africa?” (“El ataque a las leyes de tierra y semillas. ¿Quiénes están presionando por los cambios en África.”), enero de 2015, pp 8-9, <https://www.grain.org/e/5121>.

Africana produjo sus propios principios rectores sobre inversiones agrarias a gran escala en África, a través de una iniciativa de política agraria conocida como Land Policy Initiative (LPI).¹²

Mientras tanto, las agencias intergubernamentales y los grupos multi-sectoriales están desarrollando diversas herramientas para que los inversionistas las utilicen para probar que cumplen con estándares de buen comportamiento corporativo (ver el recuadro “Abundancia de directrices”).

La sociedad civil: ¿logra algún avance o sale perdiendo?

Varias organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales también han promovido la inversión responsable como una cuestión de estrategia. Por ejemplo, muchos grupos han presionado para que se implementen las Directrices Voluntarias a nivel nacional y regional. Aunque reconocen que el texto no es perfecto (pues no condena el acaparamiento de tierra, por ejemplo), consideran que da apoyo político al derecho a la tierra de las comunidades. Algunas organizaciones han trabajado a través de iniciativas dirigidas por las Naciones Unidas o los gobiernos, tales como el programa de la FAO en Senegal, en el que muchos grupos nacionales están participando. Otros lo han hecho a través de la Land Policy Initiative (Iniciativa sobre Políticas Agrarias) de la Unión Africana, en la cual participan o piensan participar varias redes regionales. En otros casos, redes internacionales como FIAN, CIP y ActionAid están implementando sus propios programas para promover e implementar las directrices sobre tenencia de la tierra a nivel nacional. Estos esfuerzos no están dirigidos solamente a África, sino que buscan incorporar las Directrices Voluntarias a la legislación nacional en todas partes, incluyendo Europa, América Latina y Asia.

Hasta el momento, Guatemala es el único país que ha incorporado las Directrices Voluntarias a un marco nacional de políticas sobre tierra.¹³ El país tiene una de



Está bien, necesitamos una campaña para decirle al público que ponemos la responsabilidad social por delante de los beneficios de forma que podamos obtener mayores beneficios.

las estructuras de tenencia de la tierra más desiguales del mundo, con el 60% de la tierra agrícola destinada a plantaciones a gran escala para la exportación. Se supone que la nueva Ley de Desarrollo Rural Integral responde a esta injusticia histórica y fortalece los derechos de campesinos y pueblos indígenas sobre sus tierras. Sin embargo, no menciona la redistribución de la tierra y no apoya de manera tangible la producción campesina, manteniendo el sistema de mercado existente, que sólo ha acelerado la concentración de tierra en el campo.¹⁴

Algunas organizaciones —como Amigos de la Tierra, Fern, Global Witness y ActionAid— han optado por una ruta diferente, trabajando para lograr que la Unión Europea reforme su legislación financiera e incluya un análisis de la inversiones con base en criterios relacionados con el acaparamiento de tierras. La idea es garantizar que las instituciones financieras como los bancos y los fondos de pensiones no puedan otorgar préstamos, o hacer gastos e inversiones, que se relacionen con el acaparamiento de tierras. La idea es respaldar esta exigencia mediante sanciones. Pero las posibilidades de crear regulaciones estrictas contra el acaparamiento de tierras son muy remotas. Dado el actual contexto político, donde pocos gobiernos europeos están interesados en controlar al sector financiero, se necesitarían muchos años más de campañas intensivas antes de poder obtener logros significativos.

12. African Union, African Development Bank and United Nations Economic Commission for Africa, “Guiding Principles on Large Scale Land Based Investments in Africa” (“Principios rectores sobre inversiones en tierra a gran escala en África”), 2014, <http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based-investments-africa>.

13. “Integración de las Directrices Voluntarias en la política de tierras en Guatemala”. Boletín para la Iniciativa de las Directrices Voluntarias. <http://www.fao.org/nr/tenure/boletin/noviembre2014-newsletter/es/>; Ollantay Itzamná, “¿Desarrollo Rural Integral para qué y para quiénes?” Rebelión, 1 de junio de 2015 <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193983>

14. Ollantay Itzamná, *op cit.*

Abundancia de Directrices

- La Agencia Francesa de Desarrollo, junto con el Comité Técnico “Foncier et Développement” [desarrollo de la tierra], tiene su propia guía operacional para llevar a cabo el control de antecedentes previo a una inversión (conocido como “diligencia debida”) por parte de inversionistas franceses (2015)¹
- Los *Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios* del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), de octubre de 2014.²
- Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (Mayo de 2012) + Haciendo operativas las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia: una Guía Técnica para los Inversionistas (Septiembre de 2015), ambas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.³
- UK DFID (el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido) está desarrollando guías prácticas sobre “Inversión Responsable en Tierras y Propiedades” y Landesa (relacionada con Bill Gates) es la encargada de producirlas.⁴
- Los Principios para la Inversión Agrícola Responsable (2009), de FAO, FIDA, UNCTAD, Banco Mundial.⁵
- La Nueva Alianza del G8 acaba de adoptar (en junio de 2015) un Marco Analítico para las Inversiones Responsables en Tierra Agrícola,⁶ que armoniza los principios operativos de los donantes y los hace coherentes con la Directrices Voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria y los Principios Rectores del Land Policy Initiative.
- Los Estándares de Desempeño y los Estándares Voluntarios sobre Mercancías Agrícolas de la Corporación Financiera Internacional: Manual de Buenas Prácticas y Guía de Sustentabilidad (2013)⁷
- El Interlaken Group —una iniciativa de colaboración entre grandes corporaciones transnacionales, gobiernos, agencias de Naciones Unidas y ONGs— acaba de publicar una Guía de Derechos sobre la Tierra y los Bosques para que los inversionistas puedan implementar las Directrices Voluntarias.⁸
- La Land Policy Initiative (conformada por la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y la Comisión Económica de Naciones Unidas para África) ha publicado los Principios Rectores para la Inversión a Gran Escala en Tierras Agrícolas en África (2014)⁹
- La OCDE junto con la FAO publicaron una guía sobre control de antecedentes de las inversiones o de “diligencia debida” (2015)¹⁰
- Los estándares de certificación de la Mesa Redonda sobre Soja Responsable; la guía sobre derechos sobre la tierra de la Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles; los Principios y Criterios para la Producción Sostenible de Aceite de Palma de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible; los estándares de producción de azúcar de Bonsucro; y una serie de otros estándares para el algodón responsable, cacao responsable, café responsable, etcétera.¹¹

1. <http://www.foncier-developpement.fr/publication/guide-to-due-diligence-of-agribusiness-projects-that-affect-land-and-property-rights/>

2. <http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsprincmenu/es/>

3. www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf

4. <http://www.landesa.org/what-we-do/ripl/>

5. <http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx>

6. <http://new-alliance.org/resource/analytical-framework-responsible-land-based-agricultural-investments>

7. www.ifc.org/wps/wcm/connect/138bd80041bb99d6846e8400caa2aa08/IFC_Handbook_AgroSupplyChains.pdf?MOD=AJPERES

8. www.interlakengroup.org

9. www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/guiding_principles_eng_rev_era_size.pdf

10. <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm>

11. <http://www.responsiblesoy.org/en/certification/nuestra-certificacion/?lang=e,n>, <http://rsb.org/sustainability/rsb-tools-guidelines/>, www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf y www.bonsucro.com/assets/Bonsucro_Production_Standard_March_2011_3.pdf.

- Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.¹²
- Los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios, de septiembre de 2014.¹³
- Las Guías Operacionales para la Inversión Responsable en Tierras, de la Agencia para la Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos (USAID) de 2015.¹⁴
- Las salvaguardas y estándares del Banco Mundial, actualmente en revisión (julio de 2015)¹⁵

12. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

13. <http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsprincmenu/es/>

14. <http://usaidlandtenure.net/documents/operational-guidelines-responsible-land-based-investment>

15. <https://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies>

Otra iniciativa apoyada por organizaciones de la sociedad civil en los últimos años fue la negociación de un conjunto de principios para la inversión responsable en la agricultura (RAI por sus siglas en inglés) en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO.¹⁵ Se suponía que los principios debían ir un paso más allá de las Directrices Voluntarias sobre tenencia de la tierra y establecer normas de comportamiento más amplias para las inversiones de las corporaciones en la alimentación y la agricultura. Para la Vía Campesina y otros, la idea era que se reconociera la importancia de los pequeños productores de alimentos como inversionistas, y se despejara el camino para que sus necesidades e intereses fuesen reconocidas como centrales. Lo que ocurrió, sin embargo, es que esta posición fue marginada en función de otros intereses y el texto final ha sido duramente criticado por muchas organizaciones de la sociedad civil que participaron en las negociaciones.

Un análisis del Transnational Institute resalta algunos de los principales problemas de la Inversión Responsable en la Agricultura que impulsa el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO: los derechos humanos quedan subordinados a las normas comerciales; se incluye el consentimiento libre, previo e informado, pero sujeto a reservas; los principios le asignan un papel regulatorio débil a los Estados, dejando intactos los actuales desequilibrios de poder; los derechos de los agricultores son equiparados con los intereses de las empresas semilleras; y aunque la sociedad civil peleó duro para lograr la inclusión de la agroecología, ésta aparece sólo asociada al término “intensificación

15. Los principios sobre inversión agrícola responsable desarrollados en el Comité de Seguridad Alimentaria a veces son denominados “rai” (en minúsculas y por su sigla en inglés) para distinguirlos de los principios del Banco Mundial, FAO, FIDA y UNCTAD, que se denominan “RAI” o “PRAI.”

sustentable”, algo que favorece a las corporaciones.¹⁶ De acuerdo a la dura evaluación realizada por el Comité Técnico de Desarrollo de la Tierra de la Cooperación Francesa, los principios sobre inversión responsable en la agricultura del Comité de Seguridad Alimentaria no hacen más que condonar las inversiones “responsables” impulsadas desde el Banco Mundial.¹⁷

Las IAR se desviaron

En la práctica, los estándares de inversión “responsable” en la agricultura han sido contraproducentes, o cuando menos irrelevantes.

Feronia

Tomemos el caso de la compañía canadiense Feronia, que tiene concesiones por 120 mil hectáreas en la República Democrática del Congo para plantaciones de palma aceitera y cultivo de cereales a gran escala. La compañía es 80% propiedad del gobierno de Gran Bretaña a través del Grupo CDC y de las agencias de financiamiento al desarrollo de Francia, España y Estados Unidos. Feronia y sus accionistas tienen políticas y estándares relacionadas con aspectos sociales y ambientales, condiciones de trabajo e integridad financiera. Aún

16. Sylvia Kay, “Political brief on the principles on responsible investment in agriculture and food systems” (“Informe político sobre los principios de inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios.”), TNI, marzo 2015, <https://www.tni.org/en/briefing/political-brief-principles-responsible-investment-agriculture-and-foodsystems>.

17. Comité technique « Foncier & développement », “État des lieux des cadres normatifs et des directives volontaires concernant le foncier” (“Situación de los marcos normativos y de las directrices voluntarias sobre la tierra.”), octubre 2014, <http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Etat-des-lieux-des-cadres-normatifs1.pdf>.

más, Feronia tiene una política de “tolerancia cero” a la corrupción. El gobierno español tiene prohibido invertir en cualquier actividad que involucre “un riesgo inaceptable de contribuir o ser cómplice de violaciones de derechos humanos, corrupción o impactos sociales o ambientales negativos,” mientras la participación de CDC exige que las actividades de Feronia no sean sujetas de afectación por demandas ambientales, sociales o agrarias. El African Agriculture Fund (Fondo para la Agricultura Africana), a través del cual se canaliza la participación estatal de Francia y España en el proyecto, tiene su propio Código de Conducta para la Adquisición y Uso de Tierras, pero se niega a hacerlo público. Más allá de estas reglas internas, Feronia y sus accionistas también se han comprometido colectivamente a adherir a los estándares del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, Feronia viola seriamente estos estándares. Sus plantaciones fueron adquiridas sin el consentimiento de las comunidades locales y en circunstancias oscuras, que incluyen sobornos de varios millones de dólares para el asistente del presidente del Congo, Joseph Kabila. En testimonios entregados a GRAIN y a RIAO-DRC, los líderes de las comunidades locales describen condiciones de trabajo horribles que violan las leyes laborales del país. Las personas de la localidad no pueden utilizar la tierra de las áreas en concesión, ni para la agricultura, ni para el ganado. Esto ocurre incluso en las áreas abandonadas, y los guardias de la compañía golpean, azotan y arrestan a quienes sean sorprendidos con frutos de palma aceitera cosechados al interior de la plantación. Hasta el momento, la única práctica que Feronia ha tenido que implementar como condición para su financiamiento es llevar a cabo la Evaluación Social y Ambiental de sus operaciones de palma aceitera que le impuso el Grupo CDC.¹⁸

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible

O veamos la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, conformada en el 2004 por iniciativa de la World Wildlife Fund (WWF) y varias de las compañías más grandes del mundo en los rubros de alimentación y plantaciones. Para las empresas, la Mesa Redonda fue un medio para proteger (de las crecientes críticas por

18. Para más información sobre Feronia, ver GRAIN y RIAO, “Agro-colonialismo en el Congo,” junio 2015. <https://www.grain.org/es/article/entries/5223-agro-colonialismo-en-el-congo-agencias-de-desarrollo-de-estados-unidos-y-europa-financian-una-nueva-ola-de-colonialismo-en-la-rdc>

los procesos de deforestación, los conflictos de tierra y la explotación de los trabajadores) la expansión en el consumo de una mercancía altamente rentable. Algunas de las ONGs que inicialmente se unieron a la Mesa Redonda la veían como una oportunidad para enfrentar el desequilibrio de poder entre las comunidades y los trabajadores, por un lado, y las poderosas compañías y los gobiernos cómplices, por el otro.

En el papel, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible utiliza un lenguaje enérgico sobre el consentimiento libre, previo e informado. Aún más, tiene un mecanismo de denuncias que las comunidades y los trabajadores pueden utilizar para defenderse de las compañías que no cumplen con los estándares. Pero una de las ONGs que ha sido miembro de la Mesa Redonda por largo tiempo admite que “es generalizado el incumplimiento de los estándares sobre consentimiento libre, previo e informado”.¹⁹

En Liberia, por ejemplo, la empresa Golden Agri-Resources —miembro de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y una de las compañías con plantaciones de palma aceitera más grandes del mundo— firmó un acuerdo con el gobierno liberiano que abarca 225 mil hectáreas de tierra. El Forest People’s Programme, que es parte del proyecto de la FAO para llevar a la práctica las Directrices Voluntarias, hizo una revisión del acuerdo y no encontró señal alguna de consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que las leyes de Liberia sobre tierras lo exigen y Golden Agri-Resources ha dicho que se compromete a obtenerlo. Las comunidades afectadas llevaron sus reclamos a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible sin resultado alguno. La compañía “continúa abiertamente sin cumplir con muchas de las normas de la Mesa Redonda sobre Palma de Aceite Sostenible, disposiciones legales o estándares de buenas prácticas”, señala el People’s Forest Movement. “Lo más preocupante es que se conforma un cuadro en que las compañías aplican un estilo de hacer negocios que básicamente impide cualquier posibilidad de que sus proyectos obtengan un consentimiento libre, previo e informado por parte de la comunidad”.²⁰

19. “To make palm oil ‘sustainable’ local communities must be in charge” (“Para que el aceite de palma sea “sustentable”, las comunidades deben estar a cargo”), Forest Peoples Programme, 14 de mayo 2015, <http://www.theecologist.org/campaigning/2856781/to-make-palm-oil-sustainable-local-communities-must-be-in-charge.html>.

20. “Hollow Promises: An FPIC assessment of Golden Veroleum and Golden Agri-Resource’s palm oil project in Liberia.” (“Promesas vanas: una evaluación del consentimiento libre, previo e informado

En Malasia, recientemente, otro miembro de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable, Felda Global Ventures, fue denunciada por violaciones a los derechos humanos y a las regulaciones laborales. Felda, que ha acumulado 700 mil hectáreas de palma aceitera en Malasia e Indonesia, no es un actor menor. Sus clientes incluyen a la corporación Cargill de Estados Unidos, la que a su vez abastece de aceite a Procter & Gamble y a Nestlé. Una investigación realizada por el *Wall Street Journal* en julio de 2015 mostró que los trabajadores habían sido incorporados a la fuerza de trabajo de Felda mediante el tráfico de personas; se les pagaba menos del salario mínimo, se les alojaba en muy precarias condiciones y se abusaba de ellos.²¹ “Nos compran y venden como si fuéramos ganado” dijo uno de los trabajadores provenientes de Bangladesh, aludiendo a los contratistas que organizan la planta laboral de Felda, la que está compuesta en un 85% por migrantes.

La transparencia es el principio número uno de la inversión responsable para la certificación por parte de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma, al igual que para la mayoría de los esquemas que promueven la inversión responsable, pero hay numerosos ejemplos de cómo la transparencia no funciona en la práctica. En Gabón, Olam —el gigante de la palma aceitera con base en Singapur— estableció una alianza público-privada con el régimen de Ali Bongo para cultivar 50 mil hectáreas y producir aceite de palma certificada por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. Hasta el momento, más de 20 mil hectáreas de bosque han sido desmontadas. De acuerdo al investigador local Franck Ndjmbi, se suponía que Olam llevaría a cabo un estudio de factibilidad antes de cortar el bosque, pero el estudio no se hizo.²²

del proyecto de palma aceitera de Golden Veroleum y Golden Agri-Resources en Liberia”), Forest Peoples Programme, 15 de abril 2015, <http://www.forestpeoples.org/topics/agribusiness/publication/2015/hollow-promises-fpic-assessment-golden-veroleum-and-golden-agri>.

21. Syed Zain Al-Mahmood, “Palm-oil migrant workers tell of abuses on Malaysian plantations” (“Trabajadores migrantes de la palma aceitera denuncian abusos en plantaciones de Malasia.”), *Wall Street Journal*, 26 de julio de 2015, <http://www.wsj.com/articles/palm-oil-migrant-workers-tell-of-abuses-on-malaysian-plantations-1437933321>.

22. VOA Afrique, “Le Gabon veut devenir le premier producteur africain d’huile de palme.” (“Gabón desea convertirse en el primer productor africano de aceite de palma”), 17 de agosto de 2015, <http://www.voaafrique.com/content/le-gabon-veut-devenir-le-premier-producteur-africain-d-huile-de-palme/2920679.html>

Otros ejemplos

Por todos lados surgen informes acerca de otras experiencias. En Nigeria, una nueva investigación en campo por parte de Amigos de la Tierra muestra que Wilmar, el mayor productor de aceite de palma del mundo, está violando sus propios estándares de inversión responsable en Cross River, donde actualmente cultiva 30 mil hectáreas y tiene planes para cultivar cientos de miles.²³ Los abusos cometidos varían, desde no cumplir con las obligaciones que la compañía debería guardar en relación al consentimiento libre, previo e informado, hasta provocar destrucción ambiental a gran escala. En la República Popular de Laos, se esperaba que los inversionistas chinos que recientemente obtuvieron una concesión de 10 mil hectáreas de tierra para producir arroz en la Provincia de Chapassek cumplieran con el nuevo modelo gubernamental de inversiones “justas”. Este modelo requiere que los campesinos sean “accionistas”, del proyecto mediante su contribuciones en trabajo o en tierra. En realidad, informa Amigos de la Tierra, las personas de la localidad no recibieron participación alguna de las ganancias del proyecto, ni se solicitó su consentimiento cuando les arrebataron sus tierras.²⁴

En otros casos, han surgido conflictos abiertos sobre la implementación de estándares. En Tanzania, por ejemplo, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han presentado quejas muy serias acerca de Eco-Energy, un emprendimiento conjunto dirigido desde Suecia para producir agrocombustibles. El proyecto es apoyado por el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Suecia. Consiste en la producción de caña de azúcar en 20 mil hectáreas. Casi mil 300 personas que han sido desplazadas por el proyecto aseguran que la empresa viola el Estándar de Desempeño N°5 de la Corporación Financiera Internacional sobre reasentamientos involuntarios.²⁵ Pero la empresa niega tales aseveraciones y llama a los desplazados “invasores”.²⁶

23. “Exploitation and empty promises: Wilmar’s Nigerian land-grab.” (“Explotación y falsas promesas: el acaparamiento de tierras de Wilmar en Nigeria.”), Amigos de la Tierra, junio 2015, <http://www.foe.org/news/news-releases/2015-07-worlds-largest-palm-oil-trader-comes-under-scrutiny>.

24. Darren Daley de GAPE con base en Champassak, comunicación con GRAIN.

25. Ver la campaña lanzada por ActionAid en marzo de 2015: <http://www.actionaid.org/publications/take-action-stop-ecoenergys-land-grab>.

26. EcoEnergy, 31 de marzo de 2015, http://www.ecoenergy.co.tz/fileadmin/user_upload/AA_Report_Response.pdf.

IPOP: un disfraz para el acaparamiento de tierras

Otro pilar clave de la inversión responsable en la agricultura es la “sostenibilidad.” El sector de la palma aceitera nuevamente nos da un rotundo ejemplo de por qué este principio es tan problemático en la práctica. En septiembre de 2014, las cuatro compañías que controlan el 80% de la producción de palma aceitera de Indonesia firmaron el Compromiso de la Palma Aceitera de Indonesia (IPOP por sus siglas en inglés) con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos.¹ El compromiso supuestamente se hizo para ayudar a detener la deforestación relacionada con producir palma aceitera. Pero, a cambio de no destruir los bosques primarios, las compañías obtuvieron el permiso del gobierno indonesio para acaparar tierras en otras áreas —lo que de manera típica significa tierras que están siendo utilizadas por comunidades rurales (las llamadas “tierras degradadas”). Para implementar IPOP, las compañías le piden al gobierno que “codifique los elementos del compromiso mediante una ley”. Específicamente, quieren que la política de Indonesia sobre canjes de tierra se modifique de forma que las compañías puedan “trasladar sus operaciones, de tierras forestadas a tierras degradadas”.²

“Somos serios cuando decimos que queremos producir palma de manera sustentable, pero necesitamos regulaciones fuertes que nos permitan proteger bosques que acumulan mucho carbono y áreas de alta conservación”, ha dicho el gerente de Cargill Indonesia, Jean-Louis Guillot. El gobierno, sin embargo, grita que hay trampa y asegura que las compañías están tratando de dictar las leyes. “El compromiso ya viola la Constitución Nacional. Perdemos soberanía porque estamos siendo controlados [por el compromiso]. El sector privado nos está arrebatando nuestra autoridad”, ha dicho el Ministro de Medio Ambiente y Forestería, San Afri Awang.³

Para muchos, IPOP es sólo un disfraz para acaparar tierras. En el nombre de la inversión responsable, los gigantes de la palma aceitera obtienen acceso a incluso más tierras y se aseguran de no perder tal acceso mediante nuevos instrumentos legales.



Para muchos, IPOP es sólo un disfraz para acaparar tierras. En el nombre de la inversión responsable, los gigantes de la palma aceitera obtienen acceso a incluso más tierras y se aseguran de no perder tal acceso mediante nuevos instrumentos legales. (Foto: Tatan Syuflana/AP)

1. Las cuatro compañías son Golden Agri Resources, Wilmar, Asian Agri y Cargill. Ver “Palm giants ask Indonesian gov’t to clear path toward sustainability”. (Los gigantes de la palma le piden al gobierno de Indonesia que les deje el camino libre hacia la sustentabilidad”), Eco-Business, 4 de mayo de 2015: <http://www.eco-business.com/news/palm-giants-ask-indonesian-govt-to-clear-path-toward-sustainability/>. Más tarde se unieron a ellas Musim Mas, la quinta empresa productora de aceite de palma en el país, y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.
2. Eco-Business, op cit.
3. Hans Nicholas Jong, “Govt opposes zero-deforestation pledge by palm oil firms”. (“El gobierno se opone al compromiso de cero deforestación por parte de las empresas de palma aceitera”), The Jakarta Post, 29 de agosto de 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/29/govt-opposes-zero-deforestation-pledge-palm-oil-firms.html>

¿Un camino a la nada?

En 2014, PepsiCo, una de las mayores procesadoras industriales de alimentos, acordó implementar una serie de medidas propuestas por Oxfam mediante su campaña “Tras la Marca”, para que sus productos fuesen etiquetados como “libres de acaparamiento de tierras”. La empresa comenzó a implementar las condiciones y luego produjo un informe de auditoría para demostrar cómo se comportaba su cadena de abastecimiento de azúcar en Brasil. Oxfam América encontró que la forma en que la empresa lleva sus registros de desempeño era deficiente en varios sentidos y actualmente está instando a PepsiCo a mejorarla.¹ Aunque la campaña de Oxfam es ciertamente bien intencionada, este ejemplo ilustra a qué nos puede llevar la regulación de los contratos sobre tierras: a ONGs internacionales auditando las auditorías de las corporaciones multinacionales que están tratando de cumplir con los criterios de la ONGs. ¿Realmente va esto a detener el acaparamiento de tierras? ¿Es aquí donde debiéramos poner nuestra energía?

1. Oxfam America, “PepsiCo publishes audit on land rights in Brazil” (“PepsiCo publica auditoría sobre derechos sobre la tierra en Brasil.”), 8 de julio de 2015, <http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2015/07/pepsico-publishes-audit-on-land-rights-in-brazil/>

Incluso en los Estados Unidos hay nuevos informes que describen de forma detallada cómo los sub-contratistas de Hancock Agricultural Investment Group —uno de los mayores grupos de corretaje de inversiones en la agricultura en el país y propiedad de la mayor empresa de seguros de Canadá, ManuLife— violaron sistemáticamente las leyes nacionales sobre condiciones de trabajo y de seguridad.²⁷ Las noticias al respecto surgieron sólo porque los trabajadores iniciaron acciones legales, algo que pocos trabajadores agrícolas pueden hacer. El caso demuestra que es la estructura misma de los acuerdos sobre tierras con las corporaciones — mediante los cuales, por ejemplo, un inversionista pone dinero en un fondo que le paga a un administrador que le paga a un contratista que le paga a un sub-contratista que lleva a cabo actividades ilícitas— permite al sistema evadir responsabilidades. También provoca serios cuestionamientos sobre cómo pueden los gobiernos de Estados Unidos y Canadá fomentar estándares de responsabilidad en el extranjero cuando no son capaces de aplicarlos en su propia casa. En realidad, hay abundante evidencia de casos en que la industria de los alimentos de Estados Unidos —como sus iguales de Australia o Gran Bretaña— está involucrada en casos de tráfico de personas, esclavitud y otras condiciones deplorables.

27. Ver Oakland Institute, “Down on the farm”, (“En la finca”) 2014, http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Report_Down_on_the_Farm.pdf.

Dónde poner un límite

El hecho es que la presión para impulsar la llamada “inversión responsable” en la agricultura no está deteniendo el acaparamiento de tierras. En nuestra opinión, las razones son estructurales y difíciles de evitar, incluyendo:

- El carácter voluntario de todas estas reglas y directrices impide crear legitimidad, y por lo tanto no pueden provocar un cambio. ¿Quién decide lo que es “responsable”? ¿Qué garantías hay de que los inversionistas las respetarán?
- Las empresas saben que no se les puede obligar a cumplir más allá de las leyes nacionales. Si las leyes de un país no reconocen los derechos comunitarios sobre la tierra como “legítimos”, no se les puede obligar a respetarlos.
- Es necesario tomar una decisión política sobre si se promueve el agronegocio o se promueve la agricultura y los sistemas alimentarios en manos de comunidades. Son las élites quienes aseguran que ambos son compatibles o que se deben compatibilizar. Para las comunidades que han tenido que renunciar a sus tierras y formas de vida para que se instalen los proyectos de agronegocios a gran escala, la compatibilidad es un mito.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué funciona realmente? ¿Qué es lo que ha logrado detener el acaparamiento de tierras o ha contribuido a ello en los últimos años? ¿Dónde debiera concentrar sus esfuerzos la sociedad civil?

Pensamos que son dos cosas las que mejor han funcionado. Primero y sin lugar a dudas: la presión política funciona. Lo que las empresas llaman escándalo —trabajo con los medios de comunicación, cuestionamientos públicos, campañas, movilizaciones, investigaciones, resistencia y acciones directas— logran realmente disuadir y alejar a los inversionistas. Es lo que ha ocurrido con los inversionistas de los Estados del Golfo y con las compañías europeas que operan en África. Hemos visto cómo se detuvieron o redujeron proyectos en Camerún, Tanzania y Madagascar. Las comunidades que han exigido sin descanso que se les devuelvan las tierras también han tenido algo de éxito en Sierra Leona (Addax), Camerún (Herakles), Tanzania (Serengeti) y otros lugares. Por supuesto, éste no es un trabajo que de frutos de la noche a la mañana. Pero es fundamental y necesita apoyo serio de manera desesperada.

Segundo, denunciar lo que los acaparamientos realmente significan —procesos violentos, devastadores y a menudo ilegales— también puede funcionar. Algunos acuerdos de acaparamiento han fracasado o se han revertido debido a situaciones de corrupción, violación de derechos humanos, evasión de impuestos y otros. Investigaciones acerca de la ilegalidad de las adquisiciones de tierra de Cargill en Colombia mostraron un inmenso fraude, lo que llevó a cambios en la legislación gracias a un bloque político valiente y progresista en el congreso. La evidencia creciente acerca de faltas y delitos cometidos en África por el inversionista de la India, Karuturi, provocaron una investigación sobre la compañía que la llevó a los tribunales; actualmente, Karuturi lucha por mantenerse a flote.²⁸ En Senegal, el trabajo de investigación hecho por la sociedad civil reveló que el proyecto Senhuile-Senethanol tenía un origen y una estructura oscuros, lo que llevó a que su director fuese despedido y encarcelado, aunque el proyecto continúa.²⁹ El importante trabajo de Global Witness denunciando el papel de los “señores del caucho” de Vietnam —y de las instituciones que los han apoyado, el Deutsche Bank y el Banco Mundial— en el acaparamiento ilegal de tierras en Camboya y Laos ha comenzado a provocar cambios.³⁰ El punto es

28. Ver la sección “Karuturi” en farmlandgrab.org: <http://farmlandgrab.org/cat/show/348>

29. Collectif du Ndiaël and Re:Common, “Senegal land grab on the verge of implosion,” (“Acaparamiento de tierra en Senegal a punto de derrumbarse”) 24 de julio de 2015, <http://farmlandgrab.org/25156>

30. Global Witness, página de la campaña “Rubber barons” (“Los señores del caucho”). <https://www.globalwitness.org/campaigns/land-deals/ruberbarons/>



En concreto lo que testimoniamos en el terreno donde ocurren los acontecimientos es que casi todos los llamados esquemas de inversión responsable no son sino mecanismos de relaciones públicas.

que demostrar la naturaleza criminal que ha menudo tienen los acuerdos de acaparamiento de tierras puede ser un manera más útil que hacer tales inversiones más responsables.

Por supuesto, se necesitan diversas estrategias y tácticas. Pero para los grupos de la sociedad civil es importante desde el punto de vista político fijar un límite y no buscar que las inversiones en acaparamiento de tierra sean más amables, menos agresivas, más inclusivas o menos abusivas. EL acaparamiento de tierras, incluso si se lleva a cabo de la mejor forma posible es incompatible con la soberanía alimentaria, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales. El acaparamiento debe ser denunciado y es urgente detenerlo.



GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. GRAIN elabora varios informes al año. Estos son documentos de investigación de mayor profundidad, que entregan antecedentes y análisis detallados sobre temas específicos.

GRAIN quisiera agradecer a los varios amigos y colegas que comentaron sobre este informe o que ayudaron a que tomara forma.

La colección completa de informes de GRAIN puede ser encontrada en nuestro sitio web en:

www.grain.org/article/categories/13-a-contrapelo

GRAIN,
Girona 25 pral., 08010 Barcelona, España
Tel: +34 93 301 1381, Fax: +34 93 301 16 27
Email: grain@grain.org
www.grain.org